



## Las fuerzas del Estado y la democracia.

Bertha García Gallegos\*

El lugar que ocupan las fuerzas armadas y la policía en el entramado institucional del Estado y las misiones que deben desempeñar, fueron un importante objeto de preocupaciones en los inicios del constitucionalismo político moderno. Al instituirse los ciudadanos como "el nuevo soberano" después de la caída del absolutismo, se entendía que la fuerza del Estado no podía aplicarse sobre ellos, sobre el soberano, en cualquier forma de coacción o mecanismo discordante con su calidad de mandante. De allí que la Constitución, siendo una Carta de Derechos, encierra una fuerte contradicción que no ha podido resolverse hasta el momento, pero que sigue siendo uno de los nudos problemáticos que seguirá buscando mejores formas de expresión jurídica.

Este nudo constitucional está representado por la figura del Estado de excepción. ¿Para darle al Estado la capacidad de defenderse a sí mismo, apelando a la fuerza se anulan los derechos de los ciudadanos! ¿Al inscribir este mecanismo en la Constitución, el soberano se puso la soga al cuello? Era imposible que tal cosa fuera admitida, sino es a partir de convicciones políticas que colocaran a la idea del bien común como

valor supremo a proteger: Si el Estado no existiera, no habría efectivamente una entidad legítima que garantizara los derechos de los ciudadanos. Pero el Estado es una construcción histórica promovida por las personas que se constituyen como ciudadanos en el acto mismo de construir al Estado.

Lo dicho no significa, de manera alguna, que se haya escrito la última palabra: el derecho constitucional sigue buscando la mejor forma de atenuar el contrasentido que significa utilizar la fuerza del Estado sobre los ciudadanos. Las Constituciones avanzadas mantienen, por ejemplo, que los derechos básicos son intocables en las situaciones de emergencia y esto debe ser considerado en primer lugar en la redacción de los Decretos ejecutivos y en las alertas que se prenden, a propósito de ello, en las instituciones llamadas a ejercer el debido control institucional como la Asamblea, la Corte Constitucional y otros mecanismos que velan por los Derechos Humanos.

Las fuerzas políticas que están al frente de la gestión del Estado, o las que aspiran a conducir los destinos de la nación, harían bien en poner mayor atención a estos temas. Partidos o movimientos políticos preparan a

sus cuadros para asumir un conjunto de desafíos que encontrarán en la práctica de su vocación: lograr una imagen de liderazgo apropiada a la subjetividad popular del momento, facilidad de argumentación, dotes oratorias extraordinarias, manejo de datos sobre la situación social y otros. La seguridad es el tema que a todos preocupa y aunque gran parte de los ciudadanos sufren en sí mismos algunas de sus manifestaciones, no está a su alcance el entender que el Estado tiene que emplear la fuerza de una manera gradual y planificada, para no aumentar el grado de afectación jurídica y psicológica de la población. De allí, la importancia de que los cuadros políticos aumenten su competencia sobre los aspectos que tienen que ver con la conducción de las fuerzas del Estado, siendo éste cometido un asunto esencial de la democracia, que todos los gobiernos, partidos que los apoyan o los que están en la oposición deben encarar de una u otra manera en el ejercicio de sus deberes políticos.

Benjamin Constant, el gran constitucionalista francés, consideraba que dado que las circunstancias habían llevado a la necesidad de formar cuerpos permanentes y profesionales de soldados y policías, se requerían

### CONTENIDO

#### ■ Editorial

##### Las fuerzas del Estado y la democracia.

Bertha García

pág. 1

##### "El salto al vacío": ¿Colombia de la seguridad nacional a la seguridad humana?

Saúl Mauricio Rodríguez-Hernández

pág. 2

##### El carácter reactivo de las reformas policiales en América Latina.

Bertha García Gallegos

pág. 4

##### ¿Por qué llamar guerra a las situaciones violentas en Brasil?

João Paulo Charleux

pág. 7

##### El estrés en los cuerpos de seguridad del Estado: Policías y combatientes.

Sol Espinosa Villagómez.

pág. 8

##### Diez normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

pág. 10

##### Cronología defensa, seguridad pública y ciudadana.

David Arcentales

pág. 14

condiciones específicas para mantenerlas como instrumentos de la democracia y del Estado de derecho. Lo primero - decía en su Curso de Política Constitucional- es mantener las diferencias -de naturaleza jurídica- entre ellas. "Los soldados que vigilan las fronteras y aseguran su defensa exterior deben apostarse a lo largo de ellas, distribuirse en diferentes cuerpos bajo mandos distintos, pero de manera que puedan ser reunidos bajo un solo mando en caso de ataque externo". La policía, en cambio, estará diseminada por el territorio y deberá tener muy clara su misión junto a los ciudadanos. "Acostumbrada a vigilar más que a combatir, no será arrastrada más allá de los límites que le impongan sus deberes por los jefes que la mandan, y por las autoridades que la guían y vigilan".

Los aspirantes a dirigir los destinos de la nación desde el gobierno saben que una vez que llegan a esas esferas, periódicamente deben dar paso a sus sucesores en el juego democrático; mientras que las fuerzas institu-

cionalizadas (policía y fuerzas armadas) que también están sujetas a la rotación de sus cuadros, adquieren un carácter más permanente por la cultura institucional, generada y reproducida a lo largo de tantos años de vida del Estado. En cierto modo, los políticos cuando llegan al gobierno, pueden muy bien tener la sensación de que "ellos", las fuerzas, ya estaban allí y se sienten de alguna manera como "los de casa". De allí la necesidad de que los políticos lleguen con la fuerte convicción de que representan a los ciudadanos, el soberano, quien es, en último término, el poder constitutivo de las fuerzas. Por tanto tienen la obligación y responsabilidad de orientarlas, conducir y controlarlas, determinando los mecanismos necesarios para que ello se cumpla institucionalmente.

La gestión o conducción de las fuerzas es un asunto esencialmente político y civil (representativo) que debe ser conocido y aprendido por los políticos de manera ineludible. El mando, en cambio, es el espacio propia-

mente profesional de las fuerzas, su sabiduría, que debe ser ejercido al servicio del bien común y a través de la sujeción a la autoridad civil. Así como en el caso de los políticos y la sabiduría que deben adquirir en los centros de formación de sus partidos para ejercer la autoridad política a través de la gestión y conducción de las fuerzas; el sistema de educación militar y policial es el instrumento en donde se aprenden los deberes de la sujeción democrática a la autoridad y la práctica democrática del mando. En democracia, conductores políticos, soldados y policías tienen que comprender esta necesidad imperativa, aprenderla durante su formación y convertirla en una férrea convicción a lo largo de su práctica institucional. ¡En verdad, la democracia tiene que lograr una eficiente relación entre autoridad política civil y mando institucional!

\*Socióloga, profesora de la PUCE, Directora del Boletín Democracia, Seguridad y Defensa.

## "El salto al vacío": ¿Colombia de la seguridad nacional a la seguridad humana?

Saúl Mauricio Rodríguez-Hernández \*

### El concepto de Seguridad Humana

El concepto de "seguridad humana" se hizo común en el lenguaje académico y político a partir del Human Development Report de 1994, preparado por las Naciones Unidas. Este reporte señalaba la importancia de conseguir la seguridad de los individuos desde una visión integral que garantice tranquilidad para las personas no solo con respecto a la delincuencia organizada y desorganizada sino también de sus necesidades insatisfechas, lo cual permitiría una reducción significativa de los factores de violencia. En esta

medida las Naciones Unidas definieron "seguridad humana" bajo dos criterios:

1. Seguridad respecto a las amenazas críticas como el hambre, las enfermedades y la represión.
2. Protección de los ciudadanos de eventos violentos en su vida cotidiana en sus trabajos, hogares y comunidades.

A mediados de los años noventa se empezó a pensar que las amenazas convencionales estaban prácticamente acabadas en el escenario internacional, pues los conflictos entre

estados habían dado paso a otras instancias como los acuerdos diplomáticos o la cooperación para reducir la incertidumbre de una guerra entre estados. De ahí en adelante, se consideraba que se debían preparar políticas de seguridad que propugnar por la eliminación de las "causas objetivas" de la violencia, y que junto a los mecanismos legales, la participación ciudadana y el uso adecuado de las fuerzas del Estado propiciaran un ambiente ideal para que la gente pudiera desarrollar sus actividades cotidianas sin temor a la violencia (freedom from fear) y a las necesidades insatisfechas (freedom from want).

Las características más explícitas del concepto son:

1. La Seguridad Humana es un asunto universal.
2. Sus componentes son interdependientes.
3. Se asegura de forma más sencilla a través de la prevención que de la intervención.
4. Se centra en las personas y en cómo viven en sociedad, ejercitan sus múltiples opciones, acceden al mercado y a las oportunidades sociales y viven en un ambiente de conflicto o en paz. (Bassedas)

Sin embargo, la mayor dificultad para implementar esta perspectiva y para que llegue a convertirse en políticas públicas reales ha sido el fuerte arraigo que en muchos países tiene el concepto de seguridad visto desde la perspectiva de la Guerra Fría, que señalaba que lo más importante era la protección de las instituciones más que de los individuos. Pensar en la seguridad humana ha sido particularmente difícil en los países del hemisferio sur o en aquellos que han vivido o viven bajo una situación de conflicto. Además, el rezago más evidente del concepto de seguridad de la Guerra Fría tiene que ver con la visión gubernamental de que todo fenómeno generador de violencia debe ser reducido por la vía represiva, que en pocas palabras consistía en atacar con los organismos policiales y militares la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo entre otros fenómenos generadores de violencia. Es así que el marco conceptual elaborado durante la confrontación Este-Oeste ha seguido predominando como forma de luchar contra cualquier amenaza para la seguridad.

En un contexto más general, la "seguridad humana", si bien agenciada y fomentada por las Naciones Unidas y países claves como Canadá, Noruega y Japón ha encontrado dificultades para ser implementada pues muchos consideran que hay un cruce de competencias entre los conceptos de "desarrollo humano" y de "seguridad humana"; por tanto, el análisis de la

seguridad como política focalizada no debería propugnar por la solución de problemas insatisfechos de las sociedades, dado que ello debería corresponder a otras instancias. En este sentido, la mejor analogía es que un problema de delincuencia común no podría ser atacado desde la perspectiva de la seguridad humana teniendo como marco un ministerio de seguridad, o como en el caso de Colombia en el Ministerio de Defensa, pues las competencias de este tipo de ministerios solo están limitadas a un campo de acción plenamente determinado.

### La Reforma del Sector Seguridad

A mediados de los años noventas y en concordancia con el concepto de seguridad humana, los grupos especializados incluso han empezado a hablar del concepto de Security Sector Transformation, para sociedades que si bien democráticas necesitan poner a tono sus instituciones de seguridad bajo un concepto más amplio que supere la visión "securitizada". En sí mismo el concepto SSR, busca reformar las instituciones de seguridad para que estas reflejen y promuevan la democracia en su esencia misma y garanticen principalmente las normas de convivencia en una sociedad. Es así como a partir de una ambiente tranquilo y libre de inseguridad se pueda generar un desarrollo económico sostenido. Según Alex Bellamy, esto conduce hacia una "Paz Democrática", donde la prosperidad y seguridad van de la mano, y llega a todos los estadios de la sociedad como es mostrado en el siguiente diagrama preparado por ese autor. (2003,107).



En esta línea, las instituciones del Estado que velan por la seguridad siguen ocupando su papel, pero sus funciones se hacen mucho más claras y horizontales y se empieza a hablar de corresponsabilidad de la sociedad civil a través de organismos de veeduría política y ciudadana fuertemente enraizados en esta. Es así como la transformación del sector seguridad implicaría;

1. Establecimiento de estructuras de control civil (supervisión de las autoridades electas) sobre los militares y policías.
2. La definición de roles adecuados de las instituciones civiles y militares.

3. El adecuado entrenamiento de todos los miembros de las instituciones de seguridad en derecho internacional humanitario y derechos humanos, incluyendo particularmente a los militares si estos son utilizados en escenarios de seguridad ciudadana.

4. Fortalecimiento de la vigilancia parlamentaria sobre los aparatos de seguridad.

5. Fortalecer las organizaciones civiles en estos temas para que actúen como vigilantes sobre el sector seguridad.

Una SSR sería particularmente efectiva en países que han tenido que atravesar conflictos de baja intensidad y para ello sería de particular importancia la

cooperación internacional por medio de fondos y capacitación en amplios sectores del campo de la seguridad.

### Colombia: ¿De la seguridad nacional a la seguridad humana?

Durante la historia reciente de Colombia, el problema de seguridad ha sido asociado casi exclusivamente con el concepto de la seguridad nacional, donde la defensa del Estado y la recuperación del territorio han primado sobre una ampliación de una seguridad más integral para las amplias mayorías de la población. Numerosas críticas de diferentes sectores de la sociedad incluidos "grupos de expertos" señalan que la Política de Seguridad Democrática, si bien redujo la capacidad operativa de las FARC, fue incapaz para enfrentar las "BACRIM" (Bandas criminales emergentes) y la delincuencia común organizada y desorganizada que afecta a amplios sectores en las ciudades y los campos.

En esta línea, el arraigo de la seguridad vista como un problema meramente de represión ha primado en el escenario local. La participación de la ciudadanía es casi nula en estos asuntos que se consideran concernientes a la "gran" política pública, razón por la cual estas políticas no han sido lo sufi-

cientemente efectivas para atacar los problemas de delincuencia. Los hacedores de política en Colombia, consideran que los temas de seguridad no tienen nada que ver con acabar con la pobreza o la marginalidad, más bien prima la idea de atacar las consecuencias de ésta, materializadas en las actividades delictuales.

Por lo visto, la implementación de una política de seguridad humana en el escenario local resulta aún difícil dado que persiste la idea de que este tema – la seguridad – es competencia exclusiva de las fuerzas armadas. Esto ha impedido la creación de políticas más efectivas, en las cuales participe la ciudadanía de manera directa para enfrentar los retos que implica un escenario de conflicto e incluso de post-conflicto. Se podría decir que no hay una conciencia en amplios sectores de la sociedad que aboguen por un acercamiento a la seguridad humana, y que más bien sería una especie de salto al vacío, debido a la falta de voluntad política en estos asuntos y a una visión más integral que responda a las necesidades de la gente. Si bien sería una ingenuidad considerar que un conflicto como el colombiano, se acabaría y reducirían los índices delictuales y de inseguridad por simplemente asumir la seguridad humana<sup>1</sup>, el solo hecho de considerar que el bienestar

y tranquilidad de los ciudadanos es lo más importante de garantizar desde una política de seguridad, ya sentaría un gran precedente en el avance en esta materia, es decir que sean las personas por encima de las instituciones por las que se debe propugnar desde los temas de seguridad.

#### REFERENCIAS

<sup>1</sup> Incluso la comunidad académica y de especialistas en temas de seguridad consideran que el concepto de "seguridad humana" sigue siendo tremendamente impreciso e incluso utópico de llevar a la vida práctica

1. Aya María Teresa (2006) "Seguridad Humana en Colombia: Donde no hay bienestar no puede haber paz", Revista Oasis, abril, vol. 6, num. 6, pp. 255-267.
2. Bassetas Morillas (2007) "Génesis y evolución de la expresión de la seguridad humana", Revista CIDOB d'Afers Internacionals, febrero, núm. 76 p. 47-58.
3. Bellamy Alex (2003) "Security Sector Reform: Prospects and Problems", Global Change, Peace and Security, vol 15, Num. 2, Junio. Pp. 101-119.
4. Leal Buitrago Francisco (2010) La Política de Seguridad Democrática: Razón Pública (Página Web).
5. Rodríguez Hernández Saul Mauricio (2010) Impact of International Cooperation in Security Sector Reform in Post Conflict and Conflict Settings: The Cases of Timor L'Este, Liberia and Colombia, Santiago de Chile, Global Consortium on Security Transformation, Working Paper

\* Profesor, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá. Investigador Adjunto, CENEGRI-Brasil. El artículo se basa en la ponencia del autor para el seminario "Retos al Estado: la Seguridad desde la perspectiva de los ciudadanos y las personas", Quito, Programa "Democracia Seguridad y Defensa", Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

## El carácter reactivo de las reformas policiales en América Latina.

Bertha García Gallegos\*

### El atraso del Estado frente al aumento de la criminalidad.-

En estos días, en todos los países latinoamericanos aumenta el interés por las reformas policiales, motivado por la presión frente al aumento de la violencia interpersonal, la expansión del crimen organizado y la conformación del delito como un enorme y complejo sistema. Cual amenazante maquinaria, el delito complejo se articula rápidamente, formando

redes que vinculan desde los delitos comunes callejeros, aparentemente insignificantes, con los más avezados proyectos delictivos de escala internacional o regional, que parecen ser trazados con rigurosa profesionalidad y ejecutados con técnicas de información y organización con los que, en la mayoría de los casos, los estados no puede competir.

Las causas de la inhabilidad del Estado han sido señaladas por varios analistas latinoamericanos. Entre ellas, el atraso doctrinario en temas de seguridad, la larga discusión perdida durante los noventa sobre el terrorismo como amenaza principal en Latinoamérica, la deficiente articulación entre las políticas e instituciones jurídicas, penales, carcelarias, policiales y sociales. También se incluye entre las causas a las

deficiencias en la gestión política de estas instituciones y la poca capacidad que las autoridades tienen para visualizar que las políticas al respecto tienen que ser tratadas en su conjunto para un mejor uso de los recursos del Estado. Si bien la Policía es un instrumento importante de las políticas de seguridad pública y ciudadana, no lo es todo, ni el único instrumento en la lucha contra el delito.

En estos mismos días, en México, al momento el país latinoamericano más azotado por el crimen, se debaten reformas lideradas por el presidente Calderón ante el Congreso Federal para que los gobernadores estén a cargo de la seguridad en los estados y pongan orden en la policía municipal, a menudo corrompida por los cárteles del narcotráfico. Según la iniciativa, las policías estatales deben pasar por una constante depuración y controles de confianza. Se sostiene que las policías municipales, cuerpos policiales de mayor proximidad -que representan casi un 40% de los policías de todo el país- son los más vulnerables y sujetos a la intimidación de las organizaciones criminales. El sólo concepto de "guerra" contra el narcotráfico, utilizado por la política gubernamental desde 2006, ha sido considerado como una equivocación que ha conducido a un sin fin de respuestas y contra respuestas violentas.

En cuanto al resto de América Latina, Marcelo Saín, en su libro *"Reforma policial en América Latina; Una mirada crítica desde el progresismo"*, señala las deficiencias ideológicas con las que se ha tratado de combatir el crimen. La izquierda latinoamericana que tuvo la fuerza para producir reformas importantes en el sistema político, no abordó plenamente la cuestión de la reforma policial en los años ochenta. Luego se perdió la oportunidad cuando la crisis de la deuda en América Latina golpeaba a la primera generación de gobiernos post-autoritarios. Frente al evidente agotamiento del modelo nacional de crecimiento hacia adentro, aunado a la crisis de la deuda externa, el Estado se debilitó y el resultado fue el avance

de la hegemonía neoliberal que propició la disminución de las necesarias atribuciones de regulación que debe tener el Estado. Dice el autor que en muchos sectores de izquierda todavía persisten traumas históricos asociados a las dictaduras y la represión policial que tuvieron que sufrir. Se quedaron con la imagen de que las instituciones policiales son sujetos de arbitrariedades y discriminación. Ahora deben entender que hay que convertirlas en los garantes de derechos y libertades de la ciudadanía. "Esa es una tarea que debe ser impulsada por las fuerzas políticas progresistas".

En complemento de esa idea podemos decir que, bajo la óptica del mercado, se ha acentuado la tendencia a la privatización de la seguridad acicateada por las demandas de la sociedad. Las personas pueden creer momentáneamente que están más seguras por la cercanía de guardias privados; pero en realidad, lo que ocurre es la disminución de las atribuciones del Estado en el espacio público. Se producen situaciones contradictorias cuando los ciudadanos piden "mano dura" y se saca a las fuerzas militares a la calle; luego sentirán que la presencia militar añade ingredientes de inseguridad pues la vida normal se interrumpe en muchos aspectos. Las autoridades elegidas quienes deben rendir cuentas a los votantes, saben que tienen que hacer un uso adecuado, proporcional y oportuno de las fuerzas del Estado y regular aspectos como el uso y tenencia de armas ligeras, el control legal de las empresas de seguridad privada, entre otros.

Saín también critica los análisis que consideran que la inseguridad es un subproducto más o menos automático de la pobreza y la exclusión social y que hasta tanto no se resuelvan estos males endémicos no será posible enfrentarla. Más allá de si el diagnóstico es correcto o no, impide pensar en lo que hay que hacer, hoy, para construir el anhelado mañana. También conviene pensar que las instituciones policiales suelen sufrir el desgobierno del poder político. Generalmente esto ha

generado un pacto implícito: la policía obtiene autonomía y, a cambio, le garantiza a las autoridades cierta regulación del delito. Es esencial -concluir- revertir ese pacto y asumir el control de las fuerzas de seguridad, única forma de resolver un problema que no es policial sino político.

#### Una breve mirada a lo que puede ser la policía del mundo moderno.-

David H. Bayley, especialista en Justicia criminal internacional, y animador de muchas de las reflexiones actuales sobre el tema, en un libro reciente titulado, "Modelos de actividad policial; un análisis comparativo internacional", ha hecho un examen de lo que puede ser la policía del mundo moderno, a través de un estudio comparativo entre países como la India, Japón, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Singapur y EE.UU., especialmente de las relaciones existentes entre la policía y la sociedad. Examina patrones de comportamiento básicos relativos a esa relación y presentan variaciones de esos patrones en los distintos casos. Luego de estudiar las condiciones que permiten esa variación se pueden responder a preguntas básicas como: 1) ¿cómo se desarrollan los sistemas policiales modernos?, 2) ¿qué tareas realiza la policía?, y 3) ¿qué grado de independencia tiene la policía en su carácter de actor social? Estas cuestiones (evolución, función y política) constituyen los principales capítulos del libro. En base a ello se extraen conclusiones sobre el carácter de las reformas policiales y las estrategias de prevención del crimen.

El tema específico de *"la conducción y administración policiales"*, ha sido abordado por Margaret Nitchel y John Casey editores de un libro que lleva este nombre y explica aspectos relativos al gobierno de las organizaciones policiales actuales, que exige que los líderes y jefes, incluso a nivel local, trabajen en entornos sociales, políticos y organizacionales complejos. Si la sociedad, las organizaciones sociales y políticas conocen los problemas específicos que producen y



desarrollan las diversas formas de delito, podrán incidir mejor para que las autoridades políticas y funcionarios policiales puedan definir nuevos modelos de intervención dedicados a controlar el delito y nuevos conceptos referidos al orden público.

#### En contraste, en América Latina.-

Las condiciones para emprender en reformas de la seguridad interior en la región, han sido más precarias y las situaciones existentes, asumidas como "lo normal" por los decisores políticos, sin cuestionarse siquiera que pueden ser de otra manera y mejorar las posibilidades de la sociedad frente al delito común y crimen organizado que amenaza por sofocar a la vida social. En diversos diagnósticos, Marcelo Saín, antes citado, también ha dicho que las organizaciones policiales en nuestra región han estado centralizadas, con esquemas jerárquicos semejantes a las organizaciones militares; por lo que se han vuelto anacrónicas y mantienen dificultades orgánicas y funcionales para una acción rápida y eficiente. Esta situación no solo es culpa de las policías; más bien, históricamente, los estados centralizados han construido en América Latina policías centralizadas. Hoy, esas estructuras centralizadas se encuentran frente al problema de que las sociedades son más complejas, tienen problemas cambiantes de región a región, de lugar a lugar. El crimen cada vez más organizado migra rápidamente y por eso las policías con estructuras operativas centralizadas no pueden tener la flexibilidad para atender la naturaleza cambiante de ese fenómeno.

El necesario emprendimiento de procesos de descentralización, no significa crear otros cuerpos policiales sino, dentro de la propia institución, unidades que hagan todas las tareas de la Policía por regiones, con un nivel de autonomía operacional. Esta descentralización del mando no debe anular la capacidad de control que tiene que tener una unidad centralizada sobre las unidades descentralizadas. Al contrario, es imperativo for-

talear un mecanismo de supervisión y una estrategia establecida desde el poder central que haga mucho más dinámica y cercana la labor policial con relación a los problemas locales. No se puede unificar el trabajo policial para todo un país porque hay condiciones demográficas, geográficas, político - institucionales y condiciones criminológicas que son muy variables de región a región y que ameritan un trabajo policial diferenciado entre sí.

Es urgente superar lo que en América Latina se ha constituido como un "diálogo de sordos" entre el mundo policial que se resiste a ser tratado como objeto de estudio y el mundo académico que avanza con prejuicios y enormes resistencias epistemológicas para analizar estas cosas. El tema de la seguridad interior es el que menos se ha estudiado. No solo es deficiente el conocimiento sobre las organizaciones policiales sino también la relación gobierno - policía, constituida permanentemente por una "delegación tácita" de la conducción o gestión de la seguridad a la policía por parte, de la autoridad política. Si los estudios avanzaran sería más fácil entender que para el gobierno policial se necesitan civiles con conocimiento y experticia en los temas de la gestión.

Donde los debates y posiblemente las reformas policiales se desarrollaron más vigorosamente ha sido en Centroamérica. Durante la guerra civil en los años ochenta más de 300.000 civiles fueron asesinados por militares y policías. En el Informe de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (Wola) *Enfoque: Seguridad Ciudadana Octubre 2002*, Rachel Neild, en su artículo "Sosteniendo la Reforma: Policía Democrática en América Central", afirma que el panorama resultante hizo necesario un cambio drástico de las fuerzas armadas y fuerzas policiales, para su adecuación al sistema democrático y para la pacificación de las relaciones políticas. Militares y policías se habían politizado hasta un punto extremo (espionaje político, tortura, purgas

políticas y étnicas) en medio de la impunidad que impedía el restablecimiento de la paz. Desde mediados de los ochenta, los procesos de paz que llevaron a los Acuerdos de Esquipulas I y II, emprendieron en los objetivos de separar la fuerza policial de la militar, establecer un control civil sobre las fuerzas de seguridad y desmilitarizar la seguridad interior.

Las reformas buscaban poner fin a la impunidad, a través de la creación de fuerzas policiales responsables, no partidistas y con respeto hacia los derechos humanos. Comprendieron acciones integrales, desde el reclutamiento, capacitación y sistemas disciplinarios policiales, el desarrollo de liderazgo, operaciones, provisión de recursos, sistemas de gerencia y administración, sistemas de información, desarrollo de habilidades técnicas, hasta el manejo de presupuestos y de recursos. Frente a la oposición de sectores afincados en el antiguo régimen de seguridad, se crearon nuevos marcos jurídicos y nuevos sistemas de organización y operación con un importante apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, a menudo se comprueba que significativos avances pueden frenarse si los actores que impulsan los cambios no tienen la persistencia deseada, produciéndose penosas regresiones.

Si bien desde entonces acá es necesario ponerse al día sobre lo ocurrido con tales reformas (un nuevo Informe WOLA está por salir en 2010), cabría poner atención especial sobre los aspectos que tuvieron mayor éxito en ese proceso. La reforma policial de 1993 en El Salvador, ha sido mencionada como una de esas historias de éxito relevante y ha sido famosa por su doble esfuerzo, tanto por desarrollar una PNC civil (con un reclutamiento de civiles del sesenta por ciento), como por construir confianza a través de la incorporación limitada de combatientes de ambos lados (veinte por ciento de la antigua policía y veinte por ciento del FMLN). El diseño institucional de la nueva policía fue además altamente descentralizado, contó con la construcción de controles y balances, así como de mecanismos

de vigilancia externa. Se creó la posición del Inspector General (IG), bajo el mando directo del Vice-Ministerio de Seguridad Pública, independiente del jefe de la policía y con la tarea de supervisar el sistema disciplinario interno.

Sin embargo, estos procesos que deben ser observados más de cerca por académicos y decisores políticos para sacar las correspondientes lecciones, pueden ser todavía parciales y enfrentar no pocos problemas. Un tema substancial es la creación de mecanismos de observación y supervisión a nivel regional para socializar las experiencias locales y buscar la responsabilidad compartida de los gobiernos. En octubre de 2008, bajo convocatoria de la OEA se reunieron por primera

vez los Ministros de Seguridad Pública de las Américas. Las organizaciones de la sociedad civil invitadas, puntualizaron la importancia de tener por fin un espacio de discusión a nivel intergubernamental, con inclusión de la sociedad civil, e insistieron para que desde los organismos de seguimiento de los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se impulsen códigos unificados de actuación como marco para la formación, especialización y capacitación del personal de las instituciones policiales, el establecimiento de un código de ética o conducta para las policías de la región, así como el desarrollo y la unificación de estándares, análisis y actuación para una institucionalidad democrática y respeto de los derechos humanos.

Los aspectos más incisivos de las demandas de la sociedad civil se refieren a la necesidad de diferenciar las funciones entre las instituciones policiales y las fuerzas armadas, elaborar cuerpos legales que regulen, señalando claramente las circunstancias, los plazos y las instancias de control, de la participación –que debe ser excepcional– de las FFAA en tareas de seguridad interior, pues esta confusión favorece la debilidad institucional del sistema de seguridad pública.

\*Socióloga, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

## ¿Por qué llamar guerra a las situaciones violentas en Brasil?

João Paulo Charleux\*

**L**os periodistas apenas nos hacemos una pregunta: ¿Por qué llamar "guerra" a las situaciones de violencia que existen en Brasil? "guerra de tráfico", "guerra de Río"; "guerra de las favelas", "guerra de las facciones". "guerra contra el crimen", "guerra del morro" u otros similares.

No sabemos las respuestas a esta pregunta, la misma que, para ser completa, debe tener en cuenta tres aspectos. El más inmediato de ellos quizá sea el aspecto editorial, un área bien familiar a todos aquellos que trabajan con las palabras y sus significados. El segundo aspecto es político, ya que la palabra, dicha o impresa en un medio de comunicación, provoca reacciones políticas. Un tercero y último aspecto es aquel que a uno le gustaría discutir públicamente porque se divide en dos áreas muy importantes: el área del derecho y el área humanitaria, ambas vinculadas íntimamente en este caso.

Dejemos por ahora de lado las decisiones editoriales y sus motivaciones. El área política también. Vamos a concentrarnos primero sobre la cuestión del derecho. "Guerra" es un conflicto entre las fuerzas armadas de dos o más países. Luego, no hay una guerra en el Brasil. Un periodismo de calidad debería, por tanto, tratar de hacer un uso correcto del término tal como lo hace una página deportiva, en donde ninguno llama penalti a una falta cometida fuera del área de penalti.

Una discusión desde el punto de vista jurídico, termina con eso; sin embargo nosotros entendemos que esta es una cuestión que tiene muchos matices. Vamos, entonces, a hablar de la segunda parte de este aspecto, que es la cuestión humanitaria.

En una guerra, al igual que en un conflicto armado interno, la protección de las personas está determinada por un conjunto de normas llamado Dere-

cho Internacional Humanitario o Derecho Internacional de los Conflictos Armados, el mismo que antiguamente era llamado Derecho de Guerra, cuyo núcleo duro son las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Quién puede o no ser atacado, en qué circunstancia, de qué forma, con qué armas, por qué, usando qué munición, son cuestiones humanitarias importantes previstas por el derecho humanitario.

Cuando estas normas entran en vigencia, ellas reducen algunos derechos humanos. El principal de estos es el derecho a la vida, que si bien permanece vigente incluso en un Estado de Guerra, su alcance se ve reducido, ya que pasa a categorizar a las personas que tienen derecho a la vida, como: los civiles, los combatientes capturados, rendidos, heridos o enfermos, personal médico y humanitario, en fin, categorías existentes solamente en una situación de conflicto armado definida como tal.

El uso de las armas también cambia mucho entre estas dos situaciones. En una situación de violencia, la policía –o también las fuerzas armadas en el caso de que fuesen empleadas– debe usar un arma de fuego como último recurso; en una guerra esa puede ser la primera opción. Si es una situación de violencia interna, la fuerza pública está obligada a buscar alternativas al uso letal de la fuerza; en una guerra, eso no es preciso, bastando para el ataque tener una causa definida y ser proporcional al objetivo militar pretendido. Así, solo para citar dos indicadores.

Desde esa perspectiva, ¿alguien puede pretender que alguna ciudad brasileña puede ser considerada como "territorio enemigo"? ¿Alguien encuentra que ese territorio enemigo puede ser atacado por la fuerza pública con munición suficiente para alcanzar un objetivo militar? ¿Alguien halla que en esta situación podríamos hacer una cobertura periodística, asumiendo daños militares colaterales a la población civil y a sus bienes? ¿Algún periodista o empresa de comunicación le gustaría tener su libertad de movimiento y expresión

legalmente restringidos, como puede acontecer en una guerra?

Ciertamente, en respuesta a estas preguntas, se podrá decir que, al llamar a la situación de violencia en Brasil como de "guerra", los periodistas y las empresas de comunicación no quieren decir "guerra" al pie de la letra y que, ese término, aplicado informalmente por los periodistas, traduce apenas un sentimiento, sin querer con eso cambiar la clasificación formal que una situación pueda tener.

Es un argumento. Pero nosotros podemos también proponer una provocación: el uso de esos términos, que es una aceptación de esta lógica de guerra por el periodismo brasileño, ¿no podrá acabar provocando en nuestros lectores –y entre esos lectores, al Estado y sus agentes armados– la sensación de permisividad del uso de la fuerza de una manera cada vez más parecida con la que existiría en el caso de que estuviéramos, efectivamente, en guerra? En palabras más simples ¿cual es la responsabilidad de los periodistas en el hecho de agravar el impacto humanitario de la violencia sobre las per-

sonas? Empleando términos o conceptos que amplían el potencial del uso de la fuerza, luego no podrán distinguir éstas de aquellas situaciones que, efectivamente, pueden ser llamadas de guerra.

Como ustedes podrán ver, los aspectos jurídico y humanitario sí pueden influenciar en las escuelas editoriales.

Escribir un artículo como éste, es una oportunidad de exponer nuestro punto de vista sobre los aspectos humanitarios y jurídicos que puedan ejercer alguna influencia en las decisiones tomadas por los editoriales o por las redacciones.

\*João Paulo Charleaux, periodista brasileño, editor asistente de la Sección Internacional do jornal O Estado de S. Paulo, ex-portavoz de la Cruz Roja Internacionales Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Colaborador da Oboré Projetos Especiais. El artículo está basado en una ponencia del autor titulado "Guerra, conflito armado e violência interna: o uso das palavras e seus significados", seminario "Cobertura de Segurança Pública".

## El estrés en los cuerpos de seguridad del Estado: policías y combatientes

Sol Espinosa Villagómez.\*

### 1. Las condiciones laborales van más allá del tema de sueldos y viáticos.

Estudios actuales demuestran que los problemas psicológicos que enfrentan los policías y combatientes han llegado a ser una causa de morbilidad bastante alta. Los veteranos de las últimas guerras no pueden superar, a su regreso, las imágenes violentas que vivieron y muchos prefieren suicidarse. Lo mismo ocurre con los policías en casi todo el mundo, que se enfrentan día a día al aumento de la delincuencia, acompañada de extrema violencia interpersonal cuya

experiencia es vivida especialmente por los policías subalternos<sup>1</sup>.

El policía desarrolla su labor en un entorno conflictivo, en el límite de la marginalidad y criminalidad. Su herramienta habitual de trabajo –el tolete y la pistola– tiene un riesgo genérico que se añade como factor de estrés. Pero además de estos, puramente laborales, existen otros de carácter organizativo, como las relaciones de los funcionarios entre sí, y las características del trabajo policial, que inciden en mayor o menor grado aumentan-

do su fatiga psíquica, y sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés<sup>2</sup>.

La revuelta policial del 30 de septiembre, puede leerse también desde esta perspectiva. Tuvo como uno de sus principales detonantes, al veto presidencial a la Ley de Servicio Público. Sin embargo, la inconformidad con las condiciones laborales de la tropa arrastra de experiencias de largos años atrás, por diversos factores: el sistema de pases, la percepción de impunidad entre los oficiales acusados de abusos y corrupción, la



sensación de que la cúpula solo abogaba por sus propios beneficios, el sentimiento de persecución desde el mando civil por presunción de abuso de la fuerza de algunos uniformados, el proceso de reestructura institucional, la diferencia salarial entre oficiales y tropa, la precariedad de las villas destinadas a los policías en los cuarteles provinciales, y el mal trato de ciertos oficiales a sus subalternos.

De los 40 000 miembros de la Policía Nacional, el 30% corresponden a oficiales mientras que el 70% está integrado por la tropa. Sociólogos y psicólogos que analizan las instituciones denominadas "cerradas" –entre las cuales se puede contar a la Policía, saben que entre los grupos se mantienen percepciones estereotipadas, negativas y bastante desgastadas. En estos casos, muchos elementos suelen pesar para que estas situaciones lleguen a demostrarse como verdaderas crisis. En el caso reciente han salido a relucir grados de privilegios existentes, considerados por los subalternos como injustos y poco equitativos. Éstos no solo se reflejan en la diferencia salarial sino también en las condiciones laborales. En varios cuarteles del país como el de Sangolquí, la tropa ocupa un cuarto grande con varias camas, mientras que, en la parte superior de esa dependencia, los oficiales tienen habitaciones individuales en las que, como máximo, duermen dos personas. Los cuarteles no están bien adecuados para la tropa debido a que no existe la infraestructura suficiente para alojar a todo el personal policial. En los PAI comunitarios la situación es aún más precaria. Es evidente que estas situaciones influyen en el desempeño y estado de ánimo de los uniformados<sup>3</sup>.

En el documento *Normativa y práctica de los derechos humanos para la Policía*, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomienda a los organismos policiales no establecer formas de discriminación ilícita en sus políticas de reclutamiento, contratación, asignación de tareas y ascensos<sup>4</sup>. Recomienda a las autoridades civiles

hacer un control sostenido al respecto. En el incidente del 30 de septiembre ha salido a relucir el sentimiento de las bases policiales acerca del poco respaldo que se les han dado y a la escasa información acerca del proceso de modernización policial que estableció el régimen. Los uniformados sienten que durante la reforma no existió ni defensa ni protección a los integrantes de la policía; según ellos, esto se refleja en los 503 tribunales de Disciplina en Asuntos Internos realizados entre enero del 2007 y agosto del 2010. En ese trámite fueron procesados 691 gendarmes. De ellos, 367 fueron dados de baja, 171 arrestados, 85 absueltos y 68 sancionados con castigos leves<sup>5</sup>.

## 2. ¿Los policías son sometidos a evaluaciones psicológicas?

En el Ecuador no existe información accesible sobre el entrenamiento policial subalterno y sobre los sistemas de mantenimiento psicológico. Generalmente el trabajo policial produce desarraigo familiar (por los paseos a otros lugares y ciudades lejos de sus familias). Durante una entrevista realizada por el diario *El Comercio*, el psicólogo de la policía, Gilbert Jácome<sup>6</sup>, dice que únicamente para el ingreso a la institución se realiza un test de inteligencia y otro de personalidad a los postulantes. Esto ya no ocurre durante su carrera en la institución. Sería recomendable hacer valoraciones psicológicas cada seis meses, tal como se hacen las pruebas físicas. A nivel nacional, hay unos 40 psicólogos; en Guayaquil –la plaza más grande– hay seis psicólogos. Los profesionales acuden con estudiantes de Psicología a las unidades policiales para dictar charlas sobre temas como el estrés, alcoholismo y técnicas de solución de conflictos. Los problemas cotidianos de tipo psicológico son mayoritariamente maritales, estrés o uso indebido del alcohol. También provienen de las relaciones con superiores. La terapia que se les aplica es cognitiva conductual a corto plazo, ya que el policía necesita salir aliviado desde la primera consulta. Se aplica la catarsis para que el paciente hable y baje la ansiedad. A

veces el paciente solo necesita ser escuchado; pero hay otros que requieren largo tiempo y tratamientos que incluyen a la familia.

**Los test de estrés consisten en 30 preguntas con resultados de leve, moderado y grave.** Abarca cinco áreas: problemas depresivos, de ansiedad, neurológicos, psicóticos y alcoholismo. Una de las preguntas es: ¿Me pongo nervioso ante un superior? o ¿estoy subiendo o bajando de peso? El diagnóstico se hace a través de entrevistas, observación clínica y aplicación de reactivos psicológicos. No todo policía está estresado o tiene problemas depresivos o de ansiedad. Depende del medio en el que se desenvuelve.

## REFERENCIAS

<sup>1</sup>Vincent Bramley, VIAJE AL INFIERNO, Planeta, 1993, 254pp. Rosendo Fraga, Reseña, en *El Clarín*, Agosto 8, 2010 El autor, combatiente inglés en la guerra de las Malvinas, narra su experiencia y la de decenas de soldados ingleses y argentinos a quienes entrevistó años después. Dice que quienes por lo general escriben la historia militar son historiadores, líderes políticos, corresponsales de guerra y generales victoriosos. Nunca los soldados rasos, sobre quienes recae el peso del combate. La expresión del miedo está mal visto por la institución, sus compañeros e incluso por la sociedad. Los datos demuestran que el 9% de la población carcelaria británica son veteranos de guerra y 1.100 de los homeless también lo son. Las causas son los traumas de la guerra, el alcohol y las drogas; la incapacidad para insertarse en la vida civil dada las duras vivencias que no se borran.

<sup>2</sup> Sánchez Milla J.J. et. al. "Policía y estrés laboral. Estresores organizativos como causa de morbilidad psiquiátrica. Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ponencia, Congreso Iberoamericano de Medicina del Trabajo, celebrado en Zaragoza en mayo del 2.000. Publicado en S.E.S.L.A.P. - 2001 - Vol. 1 - N° 4.

<sup>3</sup> Información obtenida del diario *El Comercio* en el artículo "Las condiciones en que trabaja la tropa fueron un detonante de la insurrección" publicado en la sección Judicial el 10/10/2010.

<sup>4</sup> Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Printed at United Nations, Geneva GE.03-45474-February 2004-2,700 Sales No. S.03.XIV.7 ISBN 92-1-354078-7 HR/P/PT/5/Add.3

<sup>5</sup> *El Comercio* "Las condiciones en que trabaja la tropa fueron un detonante de la insurrección" publicado en la sección Judicial el 10/10/2010.

<sup>6</sup> *El Comercio* "Gilberto Jácome: El estrés y el uso indebido de alcohol están entre los problemas" publicado en la sección Judicial, Entrevistas el 12/10/2010.

\* Investigadora en el Programa DSD.

## Diez normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley<sup>1</sup>

**A**mnistía Internacional, un movimiento mundial independiente de ideología política y credo, conformado por activistas voluntarios, promueve el respeto a los derechos humanos mediante campañas y actividades de sensibilización de la opinión pública y educación, así como de acciones de presión ética hacia los gobiernos para que se ratifiquen y cumplan los tratados de Derechos Humanos. Entre las más reconocidas por la comunidad internacional, figura su propuesta de un código de Diez normas básicas de Derechos Humanos para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, entre ellos, autoridades civiles, jueces y policías.

Amnistía Internacional (AI) ha incluido miembros de todos los países del mundo desde que, en 1960 en Bélgica, se tomó la decisión de crear una organización permanente. En 1969 un observador de la organización asistió al juicio de Nelson Mandela. En enero de ese mismo año la UNESCO le otorgó la

categoría de entidad consultiva. Entre 1970 y 1972 lanzó la primera campaña mundial por la abolición de la tortura, la misma que se convirtió, ya en 1975 en la Declaración de las Naciones Unidas contra la Tortura. Una delegación de AI investigó en 1973 al régimen militar de Chile acusado de violaciones masivas a los derechos humanos. En 1977, ganó el premio Nobel de la paz y en 1978 el Premio de Derechos Humanos de la ONU.

Entre otras campañas importantes emprendidas por AI están: el Estatuto para incluir el trabajo en favor de las personas refugiadas (1985); sobre los abusos perpetrados por grupos armados de oposición, la toma de rehenes y las personas encarceladas por su orientación sexual (1991); la promoción de una Corte Penal Internacional permanente, cuya creación por las Naciones Unidas fue aprobada en 1998; el control de las Armas Ligeras (2003); "No más violencia contra las mujeres" (2004). En 2006 investigó e informó sobre el papel

de Europa en las "entregas extraordinarias" por parte de los estados europeos en los vuelos estadounidenses que se utilizan para secuestrar y encarcelar a personas en el contexto de la "guerra contra el terror" sin el debido proceso.

La organización ha instado a los grupos políticos armados a respetar los derechos humanos y a dejar de cometer abusos como el encarcamiento de presos de conciencia, la toma de rehenes, la tortura y el homicidio arbitrario y deliberado de personas. Mantiene relaciones oficiales con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de la Unidad Africana (OUA) y la Unión Interparlamentaria (UIP).

### REFERENCIAS

<sup>1</sup>Amnistía Internacional, Secretariado internacional, <http://www.amnesty.org/es/contact>

### NORMAS BÁSICAS PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.

1. Todas las personas tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación de ninguna clase, y especialmente frente a la violencia y las amenazas. Especial atención merece la protección de grupos potencialmente vulnerables, como niños, ancianos, mujeres, refugiados, desplazados y miembros de grupos minoritarios.

2. Debe tratarse a todas las víctimas del delito con compasión y respeto, y protegerse en particular su seguridad e intimidad.

3. No debe utilizarse la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en el menor grado posible que exija las circunstancias.

4. Debe evitarse el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas pero pacíficas. Para dispersar reuniones violentas, debe emplearse el menor grado de fuerza posible.

5. No deben emplearse medios letales si no es absolutamente imprescindible para proteger la propia vida o la de otras personas.

6. No debe efectuarse nunca una detención sin base legal para hacerlo o sin ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos para ello.

7. Debe garantizarse que a todos los detenidos se les permite comunicarse sin demora con sus familiares y su abogado y se les presta toda la asistencia médica que necesiten.

8. Todas las personas detenidas deben recibir un trato humano. No se infligirán, instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna circunstancia, y hay que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo.

9. No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o «desapariciones», y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo.

10. Debe informarse de cualquier quebrantamiento de estas normas básicas al funcionario de rango superior y a la fiscalía. Hay que asegurarse de que se toman las medidas necesarias para investigar tal quebrantamiento.

## ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD NO MILITAR Y POLICIAL

### POLÍTICA ECONÓMICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

**Art. 13.-** El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria

**Art. 262.-** Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias

1. Fomentar la seguridad alimentaria regional

**Art. 281.-** La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.

**Art. 284.-** La política económica tendrá los siguientes objetivos:

1. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.

### POLÍTICA INTERNACIONAL Y DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

**Art. 419.-** La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

**Art. 423.-** La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.

### POLÍTICA ENERGÉTICA

**Art. 413.-** El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

**Art. 414.-** El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

### POLÍTICA AMBIENTAL

**Art. 12.-** El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

**Art. 14.-** Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

**Art. 15.-** El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

**Art. 72.-** En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

**Art. 73.-** El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

**Art. 259.-** Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía.

**Art. 399.-** El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

**Art. 416.-** Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.

## POLÍTICA DE PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS

**Art. 404.-** El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

**Art. 405.-** (...) Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

## RÉGIMEN DE DESARROLLO

**Art. 275.-** El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  
Planificación participativa para el desarrollo.

**Art. 279.-** El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. EL SISTEMA SE INTEGRARÁ POR UN CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, QUE INTEGRARÁ LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y UNA SECRETARÍA TÉCNICA, QUE LO COORDINARÁ. El Consejo Nacional de Planificación tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. LOS CONSEJOS CIUDADANOS SERÁN INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN Y GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CONSENSOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, QUE ORIENTARÁN EL DESARROLLO NACIONAL

**Art. 280.-** El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público, e indicativo para los demás sectores.

## POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD

**Art. 400.-** El Estado ejercerá la SOBERANÍA SOBRE LA BIODIVERSIDAD, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.  
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

**Art. 401.-** Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

**Art. 402.-** Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

**Art. 403.-** El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

## ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN RELACIONADOS CON LOS SISTEMA DE PREVENCION Y MANEJO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.

**Art. 261.-** El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

### 7. EL MANEJO DE DESASTRES NATURALES.

**Art. 389.-** El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley tendrá como funciones principales, entre otras:

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano.
2. Generar y democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentados, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.

**Art. 390.-** los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.

**Art. 397.-** En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.

**Art. 399.-** Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.



# CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

## Bimestre: septiembre-octubre 2010

David Arcentales \*

### 1. SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA

**Consecuencias de la criminalidad.-** Fernando Antonio Noriega, Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM) de México, analiza la situación de los estados violentos: Existen cuatro pasos para llegar a esa categoría. Cuando un ser humano necesita satisfacer sus necesidades y no puede hacerlo a través del mercado, recurre a la protección del Estado. Si este no responde, a la solidaridad social. Y si esta tampoco lo hace, entonces escala a la violencia. Es aquí cuando aparece el narcotráfico, como alternativa de progreso social rápida, para una población que no ha tenido oportunidades. Estos individuos crecen sin escuelas, sin sociedad, sin instituciones y no encierran valores. Diario Expreso 12/09/2010.

**Antecedentes inmediatos de la insubordinación de la Policía Nacional.-** El malestar en las filas policiales empezó meses atrás no solamente por la Ley de Servicio Público, sino por razones como el descabezamiento de tres cúpulas policiales, la eliminación de programas de capacitación, la sustitución de la UIES, la asignación de policías para que realicen un trabajo de inteligencia en la institución e identifiquen a los agentes que promovían el descontento. La situación se agravó debido a que el ex Comandante Freddy Martínez y la cúpula desoyeron los pedidos del resto de policías, además no se conformaron las comisiones para tratar los puntos en los cuales habían desacuerdos y no se comunicó dichas inconformidades al Ministro del Interior. Diario Hoy 01/10/10

Empezaron a circular correos electrónicos donde se denunciaban actos de corrupción de altos oficiales. Otros mencionaban los casos "GAO" y "Terranova" y en última instancia criticaban a Martínez. Finalmente un grupo de oficiales y policías de tropa se reunieron en las instalaciones del GIR de Quito con el propósito de defender la institucionalidad de la Policía. Su objetivo se transmitió a casi todas las ramas de la entidad: "... La intención se logró por casi todas las uni-

dades policiales. De las élites, solamente el GOE no participó, ya que sus efectivos prefirieron mantenerse distantes." Las dos semanas anteriores a la protesta se intensificó el movimiento, pues solo estaban esperando la aprobación de la Ley de Servicio Público para actuar, después solo bastaron unas llamadas telefónicas para dar inicio a la manifestación en los principales centros policiales de Quito y de todo el país. Diario Expreso 01/10/10.

**Saldo de la protesta policial del 30 de septiembre.** Aparte de las pérdidas económicas y los daños materiales ocasionados en varios puntos del país, las protestas del 30 de septiembre dejaron 8 muertos y 274 heridos. Diario Hoy 01/10/10. En los enfrentamientos ocurridos en el rescate del presidente se perdieron las vidas de dos policías y dos militares. La Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios relacionados con estas instituciones empezaron un proceso de depuración. El primero en presentar su renuncia fue el ex Comandante de la Policía, Freddy Martínez, quien fue relevado por Patricio Franco; el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, también presentó su renuncia pero ésta no fue aceptada. A la par se iniciaron un sinnúmero de detenciones, procesos judiciales y de investigación para determinar a los culpables de la sublevación; así también, oficiales de la policía y del ejército fueron reubicados en otros destacamentos. Diario El Comercio 02/10/10.

**Consecuencias de los sucesos del 30 de septiembre. Estado de excepción.-** La Asamblea Nacional se reunió para determinar posibles cambios a la Ley de Servicio Público, la cual fue el motivo de la protesta. La bancada del movimiento Alianza País propuso extender el Estado de excepción por 60 días. Ante la amenaza de un nuevo levantamiento el gobierno ecuatoriano amplió la duración del estado de excepción por 3 días más y acordó que las escoltas tanto legislativas como ejecutivas fuesen asumidas por las Fuerzas Armadas. Finalmente, la imagen de la institución policial, así como de las otras instancias del gobierno quedó nuevamente enmarcada en la incertidumbre y el descontento de la ciudadanía,

dejando a las autoridades gubernamentales la gran tarea de formular un Estado que nuevamente brinde confianza a sus ciudadanos. Diario Hoy 02/10/10.

**Policías ecuatorianos encausados por sublevación afrontarían penas de 4 a 12 años.-** Tres civiles y 33 policías procesados por la sublevación del 30 de septiembre, se enfrentan a penas de 4 a 12 años de cárcel, dependiendo de su responsabilidad, informó la Fiscalía. Se han presentado cargos contra 32 agentes por rebelión e intento de magnicidio, y contra otro por bloquear el acceso a la Asamblea Nacional. En cambio, según Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, el Gobierno considera que no hay responsabilidad penal en las acciones de los militares que se sumaron a la revuelta. El Comercio 21/10/2010.

**El movimiento ecuatoriano Alianza País analiza una solución a reclamos de la Policía.-** Aunque el presidente Rafael Correa rechazó acoger los pedidos de la Policía en la Ley de Servicio Público, el oficialismo busca una salida a los reclamos de los gendarmes, luego de los incidentes del pasado jueves 30 de septiembre. Una opción es reformar los artículos polémicos una vez que la norma esté en vigencia. Otra iniciativa señala que ciertas bonificaciones económicas para los policías y militares puedan quedar establecidas en el reglamento a la nueva Ley de Servicio Público o en una resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Diario Expreso 02/10/2010. Asamblea Nacional del Ecuador prefiere no investigar los hechos del 30 de septiembre.- En el documento, aprobado con 62 votos, se excluyó la necesidad de llamar a comparecer a ningún ministro o jefe de la Fuerza Pública. Tampoco se esperó a que la Fiscalía termine los procesos de investigación. El Universo 30/10/10.

**Reestructuración de la Policía Nacional.-** Según Gustavo Jalkh, ministro del interior los hechos sucedidos el pasado 30 de septiembre se debieron al descontento de la tropa que responde a las condiciones extremas en las que trabajan y a la desinformación sobre la Ley de Servicio Público. Sin embargo, menciona

que también influyó la desarticulación y despreocupación de la cúpula policial. Diario El Comercio 10/10/2010. Además dijo que los temas más urgentes en la restructuración de la policía son el bienestar social de los uniformados, la regulación de pases y la vivienda fiscal. También aseguró que hay policías que están politizados pero que al momento se lleva un proceso de depuración dentro de la institución. Diario Expreso 23/10/2010

**Cuatro comisiones postcrisis se crearon en el Gabinete ecuatoriano.-** Según fuentes del Gobierno, la idea es reforzar el trabajo en estas áreas. La comisión política, presidida por la ministra Doris Solís, tiene como tarea clave: reestructurar alianzas con organizaciones sociales y políticas del país. La de Relaciones Internacionales, a cargo de la Cancillería, buscará apoyo al Gobierno en todo el mundo. La comisión de seguridad, formada por los ministros de Defensa, Javier Ponce; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal y de Gobierno, Gustavo Jalkh evaluará la situación en las Fuerzas Armadas y Policía. Simultáneamente, el presidente Correa empezó una evaluación de su equipo de trabajo, con la lógica de eficiencia y compromiso. Diario El Comercio 18/10/2010.

## SISTEMAS DE INTELIGENCIA

**Los Sistemas de Inteligencia estarán bajo la dirección del Comando Conjunto de las F.F. A.A.** Mandatario ecuatoriano admite que hubo un fallo de inteligencia durante la insurrección dado que no se detectaron indicios de una insurrección. Correa afirmó que anteriormente esos servicios dependían de la embajada de Estados Unidos y que ahora los están reconstituyendo de forma autónoma. Diario Expreso 06/09/2010.

**Ex jefe de Inteligencia cuestiona seguridad del Presidente ecuatoriano Rafael Correa.** Mario Pazmiño, aseguró que quien dirige la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAI) es el arquitecto Francisco Jijón, una persona de profesión civil que desconoce las tácticas militares. Aseguró que el equipo de seguridad del Presidente no cumplió su labor; desapareció cuando iniciaron los bombardeos de gases lacrimógenos en el Regimiento Quito, el pasado jueves 30 de septiembre. Diario El Universo 07/10/10.

**El Gobierno alista cambios en el área de Inteligencia.** Extraoficialmente se conoció que la seguridad presidencial volvería

a manos de Inteligencia Militar (Ejército), ya que sus miembros son los únicos que cuentan con formación en protección de jefes de Estado. La seguridad del presidente Correa estaba en manos del mayor de Policía, Rommy Vallejo. El Cnel. Fabián Solano dejaría la Dirección General de Inteligencia policial y pasaría a la Policía Comunitaria (POLCO); en su lugar, iría el Cnel. Claudio Guerra. El Cnel. Juan Carlos Rueda, jefe de la ULCO, pasaría a la Dirección de Educación de la Policía, y en su reemplazo iría el Tnte. Cnel. David Proaño. Diario Hoy 09/10/2010.

**La unificación de inteligencias del Ecuador,** según Javier Ponce, ministro de Defensa, lo anunció junto con un replanteamiento de la escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Diario Hoy 13/10/10. El sistema podría ser muy parecido al que existía hasta el 1º de marzo del 2008. Pero también resaltan que si instancias como el Sistema de Inteligencia de la Policía Nacional, de la Presidencia de la República y la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) -que eran parte de la SENAIN- pasan a depender del Comando Conjunto, donde están la "rama" de inteligencia del Ejército y otros organismos similares de la FAE y de la Marina, el oficial responsable adquirirá una gran responsabilidad, por lo que deberá ser muy profesional y "libre de posibles injerencias políticas". La diferencia entre lo que tenían con la SENAIM y el esquema del Comando Conjunto es que este último cuenta con centros de análisis de inteligencia. Diario Hoy 25/10/2010.

**Jefe de Inteligencia ecuatoriana dice que las FFAA seguirán sosteniendo democracia.-** El nuevo secretario Nacional de Inteligencia, El vicealmirante Homero Arellano, consultado sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los actuales momentos, apuntó que "continuarán siendo un sostén de los procesos democráticos y una contribución al desarrollo nacional de Ecuador". Diario Hoy 26/10/2010.

## 2. MINISTERIO DE DEFENSA Y MILITARES

**En las Fuerzas Armadas también hubo inestabilidad en el 30-s.** El día jueves 30 de septiembre, unos 200 militares en trajes de camuflaje se tomaron la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Por medio de gigantografías reclamaban la derogatoria de la Ley de Servicio Público,

la Ley de Personal y la salida del Ministro de Defensa, Javier Ponce. Oficiales de tropa salieron a las afueras de las oficinas del Ministerio de Defensa en Quito para bloquear la Av. Maldonado con neumáticos quemados. Estos, al igual que sus compañeros pedían se derogue la ley que regula a los servidores públicos. Frente a estas circunstancias el Ministro de Defensa Javier Ponce convocó a una reunión extraordinaria, en la cual los oficiales de tropa pidieron además que no se tomen represalias en contra de ellos, el Ministro se comprometió a llevar este mensaje al presidente; sin embargo no descartó la posibilidad de sancionar a los manifestantes. A las 18:00, El aeropuerto fue reabierto, y poco a poco la situación en las Fuerzas Armadas volvió a la normalidad hasta que finalmente en la rueda de prensa dada por el Jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, ratificó la lealtad de los militares al Presidente. Diario Expreso 02/10/2010.

**El sistema de compensación para militares ecuatorianos quedó listo.-** El Ministerio de Relaciones Laborales publicó el Acuerdo número 00187, en donde se determina el Sistema de compensación para los soldados. Allí se determina que los militares que hasta el 31 de diciembre del 2010 cumplan 15, 20, 25, 30, 33 y 38 años de servicio y ascendieren al inmediato grado superior o tengan derecho al reconocimiento profesional percibirán, por concepto de compensación, los valores presupuestados para este año. El Comercio 26/10/2010.

**Los militares continúan como los árbitros de la democracia en el Ecuador.-** La imagen del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ernesto González y del Alto Mando el jueves 30 de septiembre, haciendo un pronunciamiento político, revivió los casos de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005), cuando su poder se esfumaba tras anunciarse el fin del apoyo militar. El 30 de septiembre, las FF.AA. se alinearon al presidente Rafael Correa, respaldaron el orden, pero retomaron un papel que se suponía superado en la Constituyente de Montecristi. Es decir, ser árbitros de la democracia. Para el general Juan Donoso Game, "la condición que tienen las FF.AA. de columna vertebral de la Nación ecuatoriana, va más allá de un cambio en la Constitución. "Los gobiernos acuden a los militares cuando

necesitan seguir en el poder". Diario El Comercio 12/10/2010.

#### **Apoyo internacional al Gobierno ecuatoriano.**

La amenaza de un nuevo golpe de Estado en el continente americano alertó a todos los países y organismos de la región y del mundo. Los pronunciamientos en contra de quebrantar el orden constitucional y los actos violentos se sumaron paulatinamente durante el 30-s. Los embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), se reunieron inmediatamente con el propósito de analizar la situación y tomar una postura frente a esta. La representante ecuatoriana María Isabel Salvador explicó las circunstancias en las cuales se encontraba su país y en menos de cinco horas se formuló una resolución apoyada por todos los miembros en la cual se condena todo intento de golpe de Estado y se demanda que se eviten los actos de violencia. A esto se sumó, el Secretario General de la OEA, José María Insulza, quien se comunicó personalmente con el presidente Rafael Correa, le reiteró el completo apoyo de la organización y reiteró que se trató de un golpe de Estado. Diario Expreso 01/10/10.

**El presidente boliviano, Evo Morales, hizo una convocatoria a sus homólogos de la región para realizar una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).** La presiden-

ta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llamó personalmente a todos los presidentes quienes, a excepción de Lula Da Silva y Fernando Lugo quienes enviaron a sus representantes, arribaron a Buenos Aires para reunirse en la cancillería. Los mandatarios sudamericanos acordaron en un documento condenar la sublevación policial ocurrida en Ecuador y daban su total apoyo al Presidente ecuatoriano y al orden constitucional. En este mismo sentido, se pronunciaron el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior Catherine Ashton, la Secretaria de Estado Norteamericana Hillary Clinton y el representante de los Estados Unidos de América para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, quien se comunicó personalmente con el Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Entre los organismos que siguieron esta tónica estuvieron el Grupo de Río, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), La Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y el Parlamento Andino. En el caso de Colombia y Perú, sus presidentes Juan Manuel Santos y Alan García respectivamente condenaron los hechos que ocurrieron en el Ecuador y como medida de seguridad

ordenaron cerrar las fronteras. Diario Expreso, El Comercio y Hoy 02/10/10.

### **3. RELACIONES ECUADOR – ESTADOS UNIDOS**

**El Gobierno de EE.UU. concederá 15,6 millones de dólares adicionales al Plan Ecuador para combatir el narcotráfico y promover el desarrollo en el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia.-** El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, informó de esta decisión a su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce, durante una reunión que mantuvieron en el Pentágono durante una visita oficial en Washington. El Universo 21/09/2010.

### **4. ECUADOR EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA UNASUR.**

Ecuador, como presidente temporal de la UNASUR, elaborará hasta el 26 de noviembre un estatuto de sanciones contra golpes de Estado.- Las bases del mismo fueron acordadas por los presidentes del bloque regional. La llamada Cláusula Democrática fue pactada por los mandatarios durante la reunión de urgencia que mantuvieron en Buenos Aires, y en la que se analizó la sublevación policial que afrontó el Gobierno ecuatoriano. Diario Hoy 02/10/2010.

\* Investigador en el Programa DSD.



#### **Comité Editorial:**

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Berenice Cordero

#### **Asesoramiento Internacional:**

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – Real Instituto Elcano (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dr. Raúl Benítez Manaut – UNAM

#### **Investigadora:**

- María Sol Espinosa

#### **Programa: Democracia, Seguridad y Defensa**

**Dirección:** Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

**Teléfonos:** (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474

**e-mail:** bgarcia@puce.edu.ec

**Correspondencia y solicitud de ejemplares:** solespinosa86@gmail.com